



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

S.J. 256/2022

Se ha recibido en esta Abogacía General una solicitud de Informe, en relación con la **modificación nº 1 del contrato titulado “Servicio de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos existentes en los inmuebles sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid”.**

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.h) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y en el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tenemos el honor de emitir el siguiente:

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 2 de diciembre de 2022, ha tenido entrada en la Abogacía General, un oficio remitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, en el que se interesa la emisión del preceptivo Informe, a propósito de la modificación del contrato referenciado.

A la petición de Informe se acompaña la siguiente documentación:

-Proyecto de Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueba la modificación nº 1 del contrato.

-Notificación al adjudicatario de la propuesta de modificación, con fecha de 10 de noviembre de 2022.

-Conformidad del adjudicatario con la modificación del contrato, de fecha 11 de noviembre de 2022.

-Memoria justificativa de la necesidad de la tramitación de esta modificación, elaborada por la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, con fecha de 30 de noviembre de 2022. Se acompaña otra anterior de 17 de noviembre de 2022.

-Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

-Contrato firmado por la Comunidad de Madrid y CLECE, S.A., con fecha de 2 de diciembre de 2021.

-Resguardo de garantía en seguro de caución, de 19 de octubre de 2021, por importe de 134.752,79 euros.

-Observaciones al expediente de la Jefatura de División de Contratación, de 29 de noviembre de 2022.

Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de fecha 4 de noviembre de 2021 se adjudicó a la empresa CLECE, S.A., el contrato titulado "Servicio de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos existentes en los inmuebles sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid". El contrato fue formalizado en fecha 2 de diciembre de 2021.

Tercero.- La propuesta de modificación se justifica porque en el primer semestre de 2023 se producirá la incorporación de la nueva sede judicial de Valdemoro, sita en C/ Trabajadoras del Cotton c/v Lili Álvarez, que agrupará en un solo inmueble las sedes de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Registro Civil y Decanato, de la misma localidad.

Cuarto.- La modificación pretendida no supone variación del precio respecto del contrato primitivo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La normativa aplicable a la modificación del contrato de servicios objeto de informe, viene dada por lo dispuesto en los artículos 190, 191 y 203 a 207, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

El artículo 190 de la LCSP consagra, entre las prerrogativas de la Administración en materia de contratación pública, la potestad de modificación del contrato.

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una excepción a un principio básico en materia contractual, cual es el de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987).

Como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, entre otros en el número 3371/1996, de 28 de noviembre, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser, precisamente, en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 48/1995, de 21 de diciembre, recoge la doctrina de la mutabilidad de los contratos, si bien sometida a ciertos límites para que no puedan ser alteradas las bases y los criterios a los que responde la adjudicación de los contratos mediante el sistema de licitación pública.

Segunda.- El artículo 203 de la LCSP supedita el ejercicio del *ius variandi* por la Administración a la concurrencia de razones de interés público, en los casos y en la forma previstos en los artículos 204 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207.

El apartado 3 del artículo 203 de la LCSP establece que la modificación del contrato deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de dicha norma.

El artículo 203 distingue los supuestos en que los Pliegos hayan previsto la modificación del contrato, de aquéllos otros en los que no concurra tal circunstancia, en cuyo caso, la modificación deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 205.

Para los supuestos en que la modificación esté contemplada en los Pliegos, el artículo 204 de la LCSP establece:

“1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual”.

Respecto al procedimiento a seguir para la modificación, cabe señalar que el artículo 191, apartado 1, de la LCSP, dispone que en los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.

Tercera.- Entrando en el examen de la modificación del contrato sometida a Informe, se ha de señalar que el apartado 22, de la cláusula 1, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares concreta los supuestos en que podrá producirse la modificación, en los siguientes términos:

“22. Modificaciones previstas del contrato: Sí.

Condiciones, Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones: El órgano de contratación, podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato, introducir modificaciones en el mismo, para incrementar o disminuir en su caso los servicios prestados por la empresa adjudicataria como consecuencia de la posible variación del número de sedes judiciales.

Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: no podrán superar conjunta o separadamente el 10% del precio inicial del contrato.

Procedimiento para la modificación: Se estará a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.

En particular, la propuesta de modificación del contrato obedece, como ya hemos advertido, a la agrupación de las sedes del partido judicial de Valdemoro (Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, nº 1 y 7 y Registro Civil , sitos en la C/ Estrella Eola, 11 Locales A y B, la de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, nº 2 y 3, sitos en la C/ Estrella Eola, 11

Locales C y la de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, nº 4, 5 y 6 y Decanato , ubicados en la Glorieta de las Sirenas, s/n), en la nueva sede judicial sita en la C/ Trabajadoras del Cotton c/v Lili Álvarez, lo cual, según se advierte en la Memoria justificativa remitida, *“no supone variación en el número de horas semanales respecto a las actualmente prestadas, toda vez que el mantenimiento de los equipos de la nueva sede, dadas sus características, será fundamentalmente de tipo preventivo lo que permite que la prestación del servicio se lleve a cabo con el grado de calidad actual sin implicar una variación en el precio”*.

Sentado cuanto antecede, cabe afirmar que la causa que justifica la modificación se acomodan al supuesto enumerado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, se ha de indicar que la modificación que se pretende no implica alteración en el precio, por lo que no se ve afectado el límite del 10% del precio inicial del contrato a que se refiere el apartado 22, de la cláusula 1, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya visto, no siendo necesario el reajuste de garantía a que se refiere el artículo 109, apartado 3, de la LCSP, según el cual *“cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación”*.

Desde el punto de vista procedimental, el artículo 191 de la LCSP exige que se dé audiencia al contratista. Este requisito se ha cumplido en el presente expediente, dando, mediante escrito de 11 de noviembre de 2022, la empresa adjudicataria conformidad a la modificación del contrato.

En virtud de cuanto antecede, procede formular la siguiente

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente la **la modificación nº 1** del contrato titulado **“Servicio de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos existentes en los**

inmuebles sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid”.

Es cuanto se tiene el honor de informar.

Madrid, a fecha de firma.

El Letrado-Jefe del Servicio Jurídico

Firmado digitalmente por: CHAMORRO PEREZ ANGEL
Fecha: 2022 12 13 09:24

Ángel Chamorro Pérez

**ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA
E INTERIOR.**